

Trabajo ganador Premio Nacional de Periodismo

Columnas sobre el Ejército
Popular Revolucionario

Categoría: Artículo de Fondo / Opinión
Tipo de Medio: Prensa (El Universal)
Fecha de publicación: 16 de julio de 2007
Autor: Raymundo Riva Palacio :

Fallas en el diagnóstico, procesamiento, análisis y disseminación de información en los servicios de inteligencia del gobierno dejaron abierta la puerta al EPR para sus sabotajes

El 18 de junio, en la reunión semanal del gabinete de Seguridad Nacional en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón recibió un informe del Cisen que mencionaba que el EPR había intensificado de manera insólita el número de comunicados a la opinión pública exigiendo la presentación de sus dos miembros secuestrados el 25 de mayo, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Entre el 2 y el 14 de junio, el EPR emitió 10 comunicados denunciando que habían sido detenidos “en una acción fortuita” de la policía en la ciudad de Oaxaca, y estaban “siendo torturados” por las autoridades federales. Nadie tenía duda: algo estaba por suceder.

La alta frecuencia de los comunicados tenía una razón muy clara. Cruz Sánchez no sólo era hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Francisco Cerezo Quiroz, comandante en jefe del Ejército Popular Revolucionario (EPR), sino que era una pieza clave dentro de la organización guerrillera.

Gabriel Alberto, que también responde al nombre de Raymundo Rivera Bravo, era el enlace personal entre las tres familias que controlan y dirigen al EPR, los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círiga Vázquez, y que sin estar enfrentadas tienen una serie de diferencias por el manejo del dinero obtenido de los secuestros de alto impacto en la década pasada —en el caso de las dos primeras—, y por el paulatino abandono de la lucha armada para incursionar en la política por la vía legal —en el caso de la tercera.

El golpe contra Cruz Sánchez había sido directamente al corazón de la Comandancia General del EPR. Las detenciones y la exigencia de su presentación con vida aglutinó de manera muy sólida al EPR en todo el país, que se puede ver con el comunicado que sacó el 7 de junio Tendencia Democrática Revolucionaria, una escisión del EPR, donde pidió anteponer las diferencias para enfrentar al Estado, y a través de los comités eperristas que emitieron los 10 comunicados. Dos se expidieron desde el “valle de México”, dos más desde la “República Mexicana”, y el resto, en orden de difusión, en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y en “algún lugar del estado de Chiapas”. De esos 10 comunicados, los únicos que aportaron información y no sólo reprodujeron las denuncias, fueron los dos primeros.

El del 2 de junio que daba cuenta de la detención, señaló que la policía de Oaxaca había detenido a tres de sus miembros, sin identificar al tercero, y que eran torturados por agentes federales y militares. El segundo, el 5 de junio, ya no hacía mención del tercero no identificado y, a diferencia del primero, ya incluía a los cuerpos de seguridad de Oaxaca como corresponsables de las torturas a sus miembros.

En la referida reunión del gabinete de seguridad nacional, los secretarios participantes: Gobernación, Seguridad Pública y Defensa, el procurador general de la República y el director del Cisen negaron ante el Presidente haberlos detenido, menos aún tenerlos. Voltearon los ojos a Oaxaca y pensaron que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz o algunos subalternos fuera de su control habían detenido a Cruz Sánchez y Reyes Amaya. El único dato que les brincaba es que ambos, en particular el primero, vivían en la clandestinidad más profunda, por lo que haberlos detenido habría requerido un nivel de información de inteligencia que no le adjudicaban al gobernador.

Dos días después de esa reunión, el 20 de junio, el EPR sacó otro comunicado, el último antes del que difundió el martes 10 de julio para reivindicar las explosiones en cuatro ductos de Pemex en el Bajío, donde por primera vez en dos semanas aportaban más información. Firmado en la “República Mexicana”, precisaban que la tortura se estaba realizando en las instalaciones de la PGR, reclamaban al líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que “además de tratar asuntos del aborto y la eutanasia, no se pronunciara junto con el PRD por la libertad de los presos políticos y de conciencia”, y expresaba su extrañeza de que la APPO no hubiera denunciado las desapariciones. Este comunicado llevaba su propio mensaje. El líder de los diputados locales del Distrito Federal es Víctor Hugo Círiga, miembro de una de las familias que históricamente han dirigido al EPR, y de los cuadros que abandonaron la lucha armada para pelear dentro de la legalidad.

La APPO tenía otras razones para su silencio. Durante la reunión del gabinete de Seguridad Nacional el 18 de junio, la conclusión a la que llegaron los funcionarios fue que el EPR estaba planeando una operación militar, en efecto, pero en Oaxaca, y muy probablemente durante los festejos de la Guelaguetza, que es la fiesta estatal más importante, que necesita el gobernador Ruiz para asentarse en el poder. A partir de ese análisis, se ordenó al gabinete de seguridad sellar Oaxaca y “apretar” a la APPO.

La forma como se ha comportado la APPO en este caso permitiría suponer que el “apretón” tuvo resultados, pero no así otra deficiencia más, en el área de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el comandante de la VIII Región Militar, general Juan Alfredo Oropeza Garnica, no hizo su trabajo en la zona de Los Loxichas, el bastión del EPR en Oaxaca. Las fallas en el sistema de inteligencia mexicano condujeron a las explosiones en los ductos de Pemex, una operación que sorprende por la rapidez con la cual el EPR montó el sabotaje.

Desde el 2 de junio en que denunciaron que sus dos desaparecidos a los primeros actos de explosivos el 5 de julio, la planeación y ejecución realizada por el EPR demoró sólo 33 días. El golpe fue muy elevado contra el gobierno para que las indagaciones sobre los hechos y el EPR se queden en la parte exógena.

Hay preguntas fundamentales que hay que hacer. La presunta responsabilidad del gobierno de Ruiz en las desapariciones, puede empezar a descartarse por el enorme nerviosismo que ha mostrado al saber que su cabeza es la más débil y la principal sospechosa. Las áreas civiles de seguridad federal insisten en que no son responsables de esa desaparición. La Sedena también lo afirma, pero las sombras la persiguen.

Falló en su cometido el general Oropeza Garnica, quien es un militar distinguido. Falló también el operativo Centinela que puso en práctica el Ejército para vigilar las instalaciones estratégicas, y en particular las petroleras, después de que Al-Qaeda amenazó con atacar a Petróleos Mexicanos (Pemex). Y al mismo tiempo, las amenazas que recibieron los hijos del jefe del Ejército Popular Revolucionario a través de un correo el 26 de junio, tienen un grado de información y de precisión en las amenazas y mensajes codificados, que sólo una fuerza superior o cuando menos equiparable, podría tener esa capacidad de fuego.

Fuentes cercanas a la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron que las versiones dentro del Ejército apuntan a que los desaparecidos fueron por cuenta de los militares. El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ya le dijo al Presidente de la República que no es así. Pero no basta. La investigación tiene que ampliarse hasta encontrar, vivos o muertos, a Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y determinar lo que sucedió con ellos. Los errores de inteligencia ya provocaron grandes pérdidas económicas para el país en los últimos días, y entre más tiempo sigan desaparecidos, los riesgos de nuevos sabotajes irán creciendo.

Estrictamente
Raymundo
18 de julio de 2007

Riva

personal
Palacio

Cabos sueltos

La desaparición de dos militantes del EPR en Oaxaca está probando el compromiso del presidente Calderón con los derechos humanos y la lealtad de su gabinete

Las organizaciones guerrilleras están pasando lista para saber si alguna de ellas sabe el paradero de los dos cuadros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez (Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, a quienes reportan como desaparecidos desde el 25 de mayo, tras ser detenidos presuntamente por los cuerpos de seguridad en Oaxaca. La comandancia general del EPR en la ciudad de México y sus ocho comités estatales en el país ya terminaron su ronda. La Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR-EPR), con la que el EPR está enfrentado, también informó que ellos no son responsables de su desaparición. La última en deslindarse el viernes pasado fue el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, agraviada con la TDR-EPR por el asesinato de uno de sus dirigentes. La conclusión del pase de lista confirma que la suerte de Cruz Sánchez y Reyes Amaya no se decidió en un ajuste de cuentas guerrillero. ¿Quién entonces? Esta es la respuesta que está buscando el gobierno federal.

Desde la semana pasada la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y el Cisen iniciaron pesquisas para hallarlos. Lo primero que hicieron fue corroborar que no hubieran sido víctimas de la delincuencia común, y revisaron los partes policiales de todas las corridas camioneras del 23 de mayo entre la ciudad de México y Oaxaca, que fue el último día en que los familiares de Reyes Amaya lo vieron. El rastreo mostró que hubo dos robos en los autobuses que cubren esa ruta, pero en ninguno se registró una toma de pasajeros. La investigación se ha profundizado para evitar que ante la falta de respuestas se den más actos de sabotaje por parte del EPR.

El presidente Felipe Calderón dijo este lunes que los bombazos en los ductos de Pemex tenían como fondo una estrategia mediática. Debe estar ganando tiempo. La última explosión en un poliducto en Querétaro produjo severos daños a la economía, con lo cual el dicho presidencial queda como un mero recurso retórico para minimizar la gravedad del hecho. Pero detrás de los lances públicos hay mucha preocupación. Una prueba es que el permiso vacacional que dio el Presidente al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se recortó 72 horas al urgirle que regresara de Roma, donde estaba el jueves pasado. El gobierno, como el EPR, están en alerta.

Las investigaciones han comenzado donde deben: por el principio. Las autoridades encargadas de ello están realizando el trabajo arqueológico de la ruta que supuestamente siguieron Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Aunque Cruz Sánchez, el único eslabón entre todas las facciones del EPR, vivía en la más grande clandestinidad, se tiene una bitácora estimada del tiempo en que debió haber partido hacia Oaxaca por las declaraciones públicas de la hija de Reyes Amaya, Nadine, quien dijo a la prensa que su padre salió la noche del 23 de mayo en autobús a Oaxaca. Aunque no hay confirmación aún de que hayan viajado juntos —lo cual es improbable de acuerdo con los cánones de seguridad cuando se vive en la clandestinidad—, según los comunicados del Comité Cerezo, fundado por los hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, alias Francisco Cerezo, comandante en jefe del EPR, y por la propia guerrilla, Reyes y Gabriel Alberto, conocido como “el tío Genaro”, fueron detenidos juntos en Oaxaca. El punto de partida son las centrales camioneras TAPO, de donde salieron cinco corridas a Oaxaca esa noche, y Del Sur, de donde salieron otras tantas. El segundo punto de la investigación es lo que les pudo haber sucedido en la capital oaxaqueña, a donde llegaron supuestamente la madrugada del 24.

Pedro Ansótegui, columnista del semanario Transición Oaxaca, que mantiene una postura crítica ante el gobierno de Ulises Ruiz, reportó en la última semana de mayo que al mediodía del 24 de ese mes la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía estatal, actuando según un tip, había llegado al Hotel del Árbol en la capital oaxaqueña en busca de un “grupo armado”. Cuando fueron detenidos, agregó, dijeron ser policías ministeriales de Chiapas que se encontraban en una comisión. Ansótegui aseguró que en realidad no se había tratado de policías, sino de una célula guerrillera, en la cual se encontraba Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano del comandante en jefe del EPR. Aunque por la función que realizaba Cruz Sánchez es poco probable que se hospedara en un hotel y no en una casa de seguridad, y además armado, la versión se ha ido consolidando en medio de los vacíos de información existentes y las crecientes sospechas sobre una posible acción de fuerzas federales en su contra.

El diario El Imparcial de Oaxaca, que es proclive al gobernador Ruiz, reportó el sábado 26 de mayo que la Procuraduría de Justicia del Estado dijo que, en efecto, se había tratado de una confusión, y que los policías de Chiapas habían llegado desde el jueves 23 por la mañana para cumplir con un mandato judicial. El periódico añadió que la Procuraduría de Justicia de Chiapas había enviado los oficios correspondientes, aunque por una falla en la comunicación en Oaxaca citó a la Procuraduría estatal; tanto la policía como elementos del Ejército habían acordonado el hotel en donde se encontraban pensando que era un grupo armado. La confusión campea libremente, lo que abona en la contrainformación que sólo beneficia a los responsables de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.

El sospechoso primario es el gobierno de Ruiz, quien niega cualquier responsabilidad, pero que, a la vez, está circulando su dicho que las explosiones en Querétaro y Guanajuato son una cortina de humo del gobierno para tapar las acusaciones lanzadas por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon contra el PAN. Si lo están diciendo convencidos, ni Ruiz ni su gente están entendiendo la gravedad de la reaparición violenta del EPR. Pero si es parte de una estrategia para tapar culpas, sus problemas crecerán exponencialmente. El gobierno federal necesita aclarar el paradero de los eperistas y rendir cuentas. Y si el gobierno de Ruiz está de alguna manera detrás de las desapariciones, su agonía se acelerará.

El gobierno de Calderón vive momentos muy adversos. No sólo está perdiendo la batalla de la opinión pública, sino que está enfrentando a una guerrilla que parece muy decidida a atacar. El hecho de que el EPR pasó lista pública a través de los comunicados, mostrando abiertamente en dónde tiene capacidad operacional en el país, es un riesgo tan alto como el hecho mismo de haber atacado instalaciones de Pemex, asumiendo quizá que, para esos días, sus militantes ya habrían sido asesinados. Pero también, no menos grave, está en el máximo interés presidencial saber si dentro de su gobierno hubo un sector al cual se le pudo haber pasado la mano en los interrogatorios de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y los asesinó, lo que significaría que dentro de su gabinete le están diciendo mentiras.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente

Raymundo

30 de julio de 2007

Riva

personal

Palacio

Atentado en ciernes

La desaparición del jefe militar del EPR, y responsable del secuestro hace más de una década del empresario Ángel Losada, abre la posibilidad de nuevos atentados

La madrugada del jueves 19 de julio sonaron las alertas: a partir del día 20 habría que esperar un nuevo atentado del EPR. La información, de acuerdo con un alto funcionario federal, provenía de un informante en Oaxaca, tras lo que se instruyó a las áreas de seguridad y se comunicó a varios gobernadores para que se avisaran y reforzaran la vigilancia. En la misma semana, un ex jefe de estación de la CIA viajó a la ciudad de México para entrevistarse con algunos funcionarios relacionados con áreas de inteligencia y les comunicó que tenían información en Washington de que el EPR preparaba un atentado contra un funcionario, un político o un empresario. Entonces, vinieron una serie de comunicados guerrilleros y de organizaciones civiles afines, apuntalando las informaciones.

El 22 de julio, en un comunicado fechado en Acapulco, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron la segunda parte de un largo análisis sobre el trasfondo político actual de Aguas Blancas, y en la conclusión, señalaron: “Confróntense todos estos hechos y medidas, saquemos conclusiones y la pregunta ahora es ¿qué hacer? Estamos en eso; analizando, discutiendo para decidir lo que nadie quiere, pero la vorágine nos arrastra hacia allá...”. Este comunicado, al no tener la marca del EPR, pasó bastante inadvertido en la opinión pública, pese a lo puntual y grave del anuncio. Tres días después, el Ejército Popular Revolucionario emitió otro comunicado.

Fechado en el puerto de Veracruz donde, al reiterar la demanda para exigir la presentación de sus dos militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, propuso la unión de los movimientos armados, “pese a nuestras diferencias políticas, ideológicas y formas de lucha”, para hacer frente a la guerra sucia que perciben ha reavivado el Estado mexicano. “Basta de que siga poniendo el pueblo en lucha la cuota de sangre, debemos impedir de una forma u otra que las cárceles se sigan llenando de presos políticos y de conciencia y de liberar a los ya existentes, ya no debe quedar sin castigo ningún asesinato político, ni una desaparición forzada más”.

Entre los dos comunicados, ese mismo 25 de julio por la mañana, comenzó a circular por internet una carta de siete páginas del Comité Cerezo, titulada “Una justa aclaración ante las verdades a medias y las mentiras y medias”, donde exponen su visión sobre una serie de análisis en la prensa tras los atentados del EPR del 5 y 10 de julio, en los cuales se menciona que los aparatos de inteligencia estaban suministrando información a varios periodistas —quien escribe esta columna incluido—, para vincular a los hermanos Cerezo con los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. En el texto, inteligente y ampliamente documentado, subrayan que “no somos parte de ningún bando en esta guerra” contra el EPR y se desvinculan de Tiburcio Cruz Sánchez y Florencia Elodia Canseco Ruiz, cuyos últimos nombres de guerra son Francisco Cerezo y Emiliana Contreras, padres de Emiliana, Héctor Francisco, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras.

La carta es sofista pero tiene una parte de suma relevancia cuando ironiza sobre los lazos familiares que se les adjudican. Se trata de un párrafo en una información sobre el EPR publicada en el número 1602 de Proceso, bajo la firma de José Gil Olmos, en la cual van insertando, entre corchetes, con mayúsculas, minúsculas y en negritas, sus propios comentarios. El párrafo dice, con los añadidos de los Cerezo, lo siguiente:

“Entre los ubicados que se señaló localizar para su detención [como parte de grupos insurgentes en los años 70’s] se encontraron Tiburcio Cruz Sánchez, (a) “Milton Luna”, “El Doctorcito”, “Eleazar Campos Gómez”, “El Chaparro”, “Milton”, “Arturo”, “Melitón”, “El Gordo”, “Jacobo”, [PERSEGUIDO-padre de los hermanos Cerezo]. Gabriel Cruz Sánchez (a) “El Oso”, “El Gutenberg” y “Antonio Montaña Torres”, [DESAPARECIDO 25/may/07-tío de los hermanos Cerezo]. Florencia Elodia Canseco Ruiz (a) “Mayi”, “La Güera”, “Martha”, “Irene Elodia”, “Carmen Ruiz” y “Lidia González Luján”, [PERSEGUIDA-madre de los hermanos Cerezo] [...] Felipe Edgar Canseco Ruiz (a) “El Pollo” o “El Canseco”, [EXTORTURADO Y EXPRESO POLÍTICO 1990-tío de los hermanos Cerezo] [...], Constantino Canseco Ruiz. [DESCONOCIDO] [...] Enrique Canseco Ruiz, [EXTORTURADO Y EXPRESO POLÍTICO 77/09/18-tío de los hermanos Cerezo]”.

Aunque no se puede afirmar científicamente que esa carta contiene un lenguaje cifrado para las guerrillas, coincide en su fondo con una serie de mensajes, a través de comunicados, que se vinieron dando en las últimas semanas las células del Ejército Popular Revolucionario en el país. En esta carta el mensaje es el contraste. El destino de todas las personas señaladas por los hermanos Cerezo entre corchetes es conocido: están en la clandestinidad, presos o desaparecidos, salvo uno, Constantino Canseco Ruiz, cuyo paradero es señalado como “desconocido”. Canseco Ruiz, hermano de Florencia Elodia y cuñado de Tiburcio Cruz Sánchez, es el jefe militar del Ejército Popular Revolucionario, el número 2 en la organización y responsable del secuestro hace más de una década del empresario Ángel Losada. Desde hace más de dos meses, también está desaparecido.

Tras las desapariciones forzadas de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR comenzó a enviar mensajes preguntando sobre Constantino Alejandro. Pero no fue sino hasta la carta de los hermanos Cerezo cuando se le identificó como “desaparecido”. Por la serie de comunicados guerrilleros en los casi dos últimos meses, se está sintiendo el relanzamiento de una guerra sucia como no la habían apreciado desde la primera parte de los 80, y hay razones para presumir que, en efecto, una fuerza muy poderosa está golpeando al corazón del EPR y amenazando a los hijos de sus dirigentes.

Información que circula en la Secretaría de la Defensa apunta a que la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya fue hecha por militares, y que fueron enviados al Campo Militar Número 1. No obstante, el Ejército ha negado reiteradamente responsabilidad alguna en ese caso y en las reuniones del gabinete de seguridad nacional, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, ha respondido al presidente Felipe Calderón y al resto de los integrantes de ese grupo que pueden ir a revisar todas las instalaciones militares y verificar que ahí no los tienen. La presión al Ejército ha sido fuerte, interna y externa, lo que ha llevado a algunos sectores castrenses a preguntarse si, en contrasentido, esa fuerza poderosa no pudiera emanar de otras fuentes, conocedoras bien de los aparatos políticos y los sistemas de inteligencia. El propósito sería, golpeando al EPR, provocar la unión de los movimientos armados en un enfrentamiento contra el gobierno. Un proceso de desestabilización sería el propósito para que grupos antigubernistas que se manejan bajo la máscara de civilidad, resultaran ganadores al final de este peligroso camino.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente

Raymundo

03 de agosto de 2007

Riva

personal

Palacio

La insurrección en Oaxaca

El EPR ha desarrollado en Oaxaca un gran laboratorio para ensayar la toma del poder, gradual y pacientemente, ante los ojos de todos y por la vía legal

El EPR reivindicó dos bombazos realizados la madrugada del miércoles en Oaxaca, y aunque por el tipo de explosivo los daños en dos empresas fueron limitados, la acción de la guerrilla no debe minimizarse. Es cierto que no fue una acción militar de la envergadura de las dos más recientes a poliductos de Pemex en el Bajío, pero la instrumentalización de una acción clásica de propaganda armada, como se puede definir lo realizado este miércoles, tiene una estrategia de mayores vuelos y podría argumentarse que cumplió lo que podría ser la primera fase de su objetivo. ¿Cuál era el propósito?

En vísperas de las elecciones municipales en Oaxaca, la discusión entre los políticos y el EPR sobre la participación o inhibición del voto como explicación de los petardos parece secundaria. Las elecciones del domingo surgen más bien como un pretexto para tensar Oaxaca y provocar una reacción del Estado mexicano en los momentos en que hay una misión de Amnistía Internacional en México para revisar las violaciones a los derechos humanos en esa región. En este juego, que sugiere un muy buen cálculo de la comandancia general del EPR, cayó el gobierno federal.

Tan pronto como se dieron los bombazos, el Ejército mandó sus tropas a patrullar las calles de la capital y colocó en alerta a las unidades en el resto de la entidad. La presencia militar sólo es un termómetro de la inestabilidad que se vive en Oaxaca. Pero si eso es grave, las cosas son mucho más delicadas de lo que en la superficie aparentan. El EPR no necesita de estas acciones para alterar el orden de los comicios por la sencilla razón que en su estrategia de largo plazo se ha valido de los instrumentos democráticos —las elecciones— para ir avanzando en control político y territorial a través de organizaciones afiliadas al movimiento armado que dan la cobertura legal para la toma de Oaxaca.

Agudizar las contradicciones sociales y políticas en Oaxaca, después de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) no pudo articular un plan para reventar las elecciones de este domingo por la doble combinación de factores de las presiones del gobierno federal tras la desaparición de los dos dirigentes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, hace casi tres meses, y los errores tácticos de sus sectores más radicales que alienaron a los maestros de la sección 22, disidente del sindicato nacional del magisterio, y provocaron su alejamiento de ellos, parece la explicación del calentamiento de la plaza.

El EPR está jugando un ajedrez sofisticado, a decir por sus movimientos, reduciendo al máximo sus operaciones militares en Oaxaca e intensificando las acciones políticas bajo cobertura legal. Esta estrategia de largo plazo puede entenderse sólo en la lectura cuidadosa de toda la crisis oaxaqueña que comenzó por la deficiente operación política del gobernador Ulises Ruiz para desactivar la protesta anual de los maestros por mejoras salariales el año pasado. Durante el conflicto, de acuerdo con un informe de inteligencia militar elaborado por la VIII Región Militar a cargo del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, se fueron insertando en la APPO organizaciones “fachada” del EPR y activando a “mentores” dentro de la sección 22, provocando que su líder, Enrique Rueda, fuera perdiendo control sobre el movimiento y, finalmente, desplazándolo.

De acuerdo con el informe de inteligencia militar, nueve prominentes figuras dentro de la APPO responden al EPR, entre los que se encuentran Felipe Edgardo Canseco Ruiz, conocido como El Pollo, que había sido detenido en 1990, y Maribel Martínez, ex miembro del PROCUP —antecesor del EPR—, con quien tiene una relación sentimental. La familia Canseco Ruiz es una de las tres que fundaron el EPR, y a la cual pertenecen biológicamente Reyes Amaya y Florencia Elodia Canseco Ruiz (Emiliana Contreras), hermana del desaparecido eperrista y esposa de Tiburcio Cruz Sánchez (Francisco Cerezo), comandante en jefe del EPR.

Adicionalmente, según el mismo documento secreto, el EPR cuenta con 23 organizaciones “fachada” en Oaxaca, a nivel estatal, regional y local, mediante las cuales articula el movimiento de masas que espera le permita “la instauración del ‘régimen revolucionario’ en las ‘zonas controladas’”. La evaluación militar no es un simple escenario de lo que puede suceder. En Oaxaca es una realidad. El mismo informe establece que el EPR ha formado 17 “asambleas populares”, que se localizan fundamentalmente en el centro y la costa occidental del estado, y cinco “ayuntamientos populares”, tres de los cuales nacieron durante el tiempo de la crisis política el año pasado. Esta faceta forma parte de la etapa insurreccional que se ha venido dando en Oaxaca, en buena parte por la torpeza de Ruiz y, sobre todo, porque los grupos de interés dentro de los partidos políticos, en agendas particulares, no han entendido cabalmente el fenómeno en Oaxaca y han sido incapaces de procesar estratégicamente las acciones del EPR.

El EPR está construyendo un “poder popular” que parte, en palabras de la inteligencia militar, “de la materialización de la ‘dualidad de poderes’ para lo cual un ‘movimiento social’ debe restar paulatinamente capacidad a la gestión gubernamental del régimen legalmente establecido, para lo cual recurre a la ‘organización sectorial’ de organizaciones obreras, campesinas, indígenas y urbano-populares”.

Dentro de esta lógica de pensamiento, la lucha armada marcha en forma paralela como una estrategia para provocar que el Estado reprima al movimiento social y agudice el conflicto.

Esta es la estrategia de la guerra popular prolongada, que se vio muy claramente a principio de los 80 en El Salvador, donde las guerrillas que después integraron el FMLN utilizaron a sindicatos y organizaciones gremiales como brazos políticos y sociales, y de manera más confrontada, ETA en España con su partido histórico Herri Batasuna.

“Se aprecia que el objetivo final del proyecto subversivo que opera en Oaxaca es crear un ‘nuevo constituyente estatal’ del cual emane una nueva constitución, y que de ésta pueda surgir un ‘gobierno popular’”, establece el informe de inteligencia militar.

“Y como los propios documentos del EPR señalan, ‘en cuanto se pueda, trasladar esta situación al nivel nacional’”. El documento menciona que el EPR, además, tiene presencia en “asambleas populares” en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y San Luis Potosí. Oaxaca, sin embargo, sigue siendo su gran laboratorio sociopolítico, en el cual la permanencia de Ruiz en la gubernatura no es causa ni consecuencia, sino pretexto. Para el EPR, que la sobrevivencia de Ruiz se

siga analizando en la ciudad de México como un tema de separación de poderes y federalismo, y no como un tema de seguridad nacional, es una ventaja cualitativa para los fines que persigue en el largo plazo.

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente

Raymundo

07 de septiembre de 2007

Riva

personal

Palacio

A la caza del EPR

- La refundación de la guerra sucia en México está atravesando por la aniquilación del EPR, sujeto a una persecución y hostigamiento por parte de una fuerza tan misteriosa, todavía, como poderosa

Una nueva amenaza contra los hermanos Emiliana, Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, hijos de Francisco Cerezo Quiroz, cuyo nombre verdadero es Tiburcio Cruz Sánchez, comandante en jefe del EPR, y de Elodia Canseco Ruiz, conocida públicamente como Emiliana Contreras, quien se encuentra en la clandestinidad desde los 70, llegó por internet. Como una anterior amenaza desde la misma dirección electrónica está altamente codificada, pero a diferencia de la primera, se mete en la historia previa del EPR, se remonta a los largos años de confrontaciones internas del PROCUP, precursor del EPR, y reconoce por vez primera que los autores del correo son los responsables de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Gabriel Alberto, hermano de Tiburcio, es una figura clave dentro de los movimientos armados. Cofundador del EPR, era enlace entre los diferentes grupos armados, por lo que su desaparición a fines de abril en Oaxaca fue un doble golpe al corazón del EPR. Extrañamente, en esta nueva amenaza no hay mención alguna de Edmundo Reyes Amaya, quien desapareció en el mismo lugar y fecha que Gabriel Alberto, y a quien el Cisen identifica como Constantino Alejandro Canseco Ruiz, el número 2 del EPR, y cabeza de la escisión eperrista Tendencia Democrática, vinculada a la APPO durante el continuo conflicto político en aquella entidad.

El correo fue enviado desde tiburcio loxicha [misscerezos@hotmail.com], mismo de donde salió la primera amenaza. Pero a diferencia del anterior, que de sí era sumamente intimidante, en éste aparecen referencias más precisas sobre el pasado de los jefes del EPR, lo que hace que la amenaza sea más concreta, al dejar saber que quienes están cazándolos conocen al detalle su historia, trayectoria y sus actuales pasos. El correo electrónico, y la deconstrucción del mismo, colocada entre paréntesis, es el siguiente: “Ale, paco, emi: ya no se hagan pendejos y ya defiendan a su tío Gabriel Alberto (de manera reiterada, los hermanos han dicho que no hay lazos sanguíneos con los jefes del EPR), no sean ojetes, no nieguen que es su tío, qué cabrones salieron que ni a su familia defienden. ¿Quieren nombres, fotos donde están con él, pruebas como dice el niño Ale? ¿Y tus demás tíos dónde están? (Dos de las tres familias históricas del EPR son los Cruz Sánchez y los Canseco Ruiz, varios de los cuales de estos últimos, ex guerrilleros, son hoy luchadores sociales que se manejan dentro de la ley; la otra es la de los Círgo Vázquez.) Díganles a buchito (Tiburcio) que es bien putito, que se acuerde de los hermanos cortez gutiérrez, de Arturo albores, carlos chavarría, de los de las huastecas, los muertitos de loxichas”.

Estos nombres y lugares son claves en la historia de las pugnas internas del PROCUP. Arturo Albores, detalló Gerardo Alberto González en un documento para el Colegio Mexiquense en 2004, llegó a Chiapas en 1979, donde fundó la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Enfrentó la represión durante el gobierno de Patrocinio González Garrido, quien promulgó una nueva ley con dedicatoria al movimiento magisterial y el movimiento indígena. En 1989, mientras estaba en una papelería en Tuxtla Gutiérrez, Albores fue asesinado. De acuerdo con González, se sospechó de terratenientes como autores intelectuales del crimen (la OCEZ fue uno de los dinamos del EZLN que atacó a los terratenientes), pero también existió la versión de que pudo haber sido un ajuste de cuentas interno.

Carlos Chavarría es Carlos Hernández Chavarría, un dirigente comunista que llegó a Oaxaca a finales de los años 70 y se vinculó con el entonces rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, fundador del PROCUP, quien lo hizo secretario general de la Universidad, hasta que fue asesinado en 1978. El asesinato le fue adjudicado al PROCUP, como parte de sus luchas internas, y entre las personas a las cuales se señaló como autores del crimen se encontraba José Luis Cortez Gutiérrez, quien junto con dos de sus hermanos, Arturo y Felipe, fueron asesinados en 1983, en otro ajuste interno de la guerrilla.

La referencia a “las huastecas” aparentemente se refiere al Comando Popular Clandestino, que cuando apareció en diciembre de 2005 en la Huasteca hidalguense fue denunciado por el EPR como un grupo “paramilitar” que pretendía asesinar a luchadores sociales. En esa región se localizaba a los comandantes Antonio y Aurora, que fueron jefes del EPR hasta su primera gran escisión

en 1999, cuando los denunciaron por abandonar los principios revolucionarios. Los dos fundaron el ERPI, pero fueron detenidos y actualmente se encuentran presos.

El correo electrónico continúa: “Dígale al ‘comandante general buchito’ que no se queje, que aguante la verga porque a él le valió madres matar y asesinar a gente inocente. Ale te cuidamos, paco síguete echando ganas, emi te amamos (estas referencias parafrasean con ironía una carta que les enviaron sus padres hace poco más de una semana desde la clandestinidad). Ale, paco, ¿por qué se odian las tres familias oaxaqueñas? (De acuerdo con un informe del Cisen, las diferencias comenzaron en los 90 por el manejo del dinero obtenido de los secuestros.)

“Buchito, dónde andas? Ya te queremos ver pa que nos sigas poniendo a tu poquita gente que te queda. Síguete echando tus peditos buchitos que cuando la sientan toda a ver si son tan cabroncitos. Tiburcio te extrañamos (el EPR ha mantenido un largo silencio en las últimas semanas, salvo un comunicado hace una semana donde señalan que sólo la comandancia en el valle de México está autorizada para emitirlos) sigue dándonos a tus culera family. Ale, paco, saben donde lava el dinero tu papa que ha sacado de los secuestros? No? En que banco? En Oaxaca? (De acuerdo con el Cisen, entre 1998 y 2006 el EPR realizó más de 30 secuestros, de donde obtuvo 73 millones de dólares.)

“Adios amores están en buenas manos, la de nosotros, sus verdaderos papacitos, Hasta luego amorcitos sigan echando ganas (una vez más parafrasean irónicamente la carta de sus padres), que pronto estarán cerca de sus familiares queridos para que ya no sigan mintiendo. Hasta luego Tiburcio matón. Amorcitos, que investigue amnistía internacional a sus papa y mama por fascistas comunistas. Salud mi comandante porque la casa pierde. Ale, paco, confíen en nosotros, poco a poco seremos amigos. Muchos besos y saludos a todos y en especial a los pedos en Oaxaca y Morelia (las casas de seguridad de la comandancia general del EPR)”.

El correo no deja mucho a la interpretación. Este grupo va sobre los hermanos Cerezo Contreras, en la búsqueda nacional de sus padres.

Pero, ¿quiénes son los que están a la caza? El EPR afirma que el Ejército. En el gobierno lo niegan, pero tampoco han hecho mucho por esclarecer que esta guerra sucia no viene desde las cañerías del Estado mexicano.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente

Raymundo

12 de septiembre de 2007

Riva

personal

Palacio

El gruere federal

- Las recurrentes fallas en los sistemas de inteligencia del Estado mexicano se vuelven cada vez más graves, y obligan al presidente Calderón a un reajuste urgente que frene la debacle

¿Qué pasó, señores? Desde hace poco más de un mes, un agente encubierto en Oaxaca reportó al Cisen que el EPR preparaba un atentado, sin poder precisar si se trataba del secuestro de un alto funcionario o empresario, o si serían nuevos sabotajes. Igualmente, la oficina de la CIA en México comunicó al gobierno de Felipe Calderón por las mismas fechas que tenían información de que existía la posibilidad de un atentado contra un alto funcionario o contra un militar. Las alertas se prendieron. La información provenía de fuentes tan serias que para el viaje a Asia y Oceanía, el Presidente decidió dejar en casa, ante la inminencia de un ataque, a su superasesor Juan Camilo Mouriño.

De nada sirvió. La madrugada del 10 de septiembre, exactamente dos meses después de que el EPR saboteara ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, seis nuevas explosiones en tuberías de la empresa en Veracruz provocaron daños económicos en 12 estados y a 25% de la producción de gas, motivando que el mercado mundial tuviera un impacto al alza el mismo lunes. Cuando menos cuatro comandos del EPR colocaron las bombas, que tenían los mismos componentes de Semptex, Anfo y fertilizantes que emplearon en el Bajío. En cuatro gasoductos en Veracruz fueron colocados en las válvulas de seccionamiento, donde más se estresa el metal, igual a la que explotó en el ducto en Querétaro dejando hoyos similares de seis metros de profundidad.

¿Qué pasó, señores? Tras las explosiones en Querétaro y Guanajuato, la responsabilidad recayó en el director del Cisen, Guillermo Valdés, quien llegó a ese cargo por insistencia de su viejo amigo, Felipe Calderón, con quien participó en su cuarto de guerra

durante la campaña presidencial. Valdés, un politólogo, no tenía idea de lo que eran los servicios de inteligencia, y los sabotajes del EPR no necesariamente lo tomaron desprevenido, pues el Cisen había detectado una comunicación intensa de la guerrilla en los días previos. Lo que no supo fue cómo procesar la información, ni cómo enfatizar la gravedad de lo descubierto en las reuniones del gabinete de seguridad nacional, que se reúne los lunes en Los Pinos. Colocado públicamente en la picotilla, dentro del gobierno lo cobijaron.

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, de quien depende el Cisen, lo llamó para darle calor político. En una plática poco después de las explosiones en El Bajío, le reconoció que el Cisen había sufrido un abandono durante los últimos 10 años, y que había sido terminado de dismantelar en el sexenio pasado. Que no se preocupara, le subrayó, porque tenía instrucciones de darle recursos para mejorar la capacidad humana y tecnológica del maltratado Cisen. El respaldo a Valdés no resolvió nada.

Las explosiones en Veracruz volvieron a mostrar las deficiencias que enfrenta la inteligencia civil del Estado Mexicano. En el caso de los sabotajes, un argumento que manejan altos funcionarios mexicanos es que los más de 62 mil kilómetros de tuberías de Pemex por todo el país hacen humanamente imposible vigilarlas todas. Sin embargo, de ese total hay 4 mil que se consideran estratégicas, donde la vigilancia puede ser acotada y reforzada. No ha sido así, ni desde el 10 de julio pasado que se comprometieron a reforzarla, ni desde 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas mexicanas iniciaron el Plan Centinela a fin de evitar ataques en instalaciones estratégicas.

Actos terroristas o de movimientos armados no se frenan con poderío militar o policial. Lo que ayuda es un eficiente sistema de inteligencia que permita anticiparlos mediante la obtención de información. Ésta proviene de agentes encubiertos por un lado — como aquél que envió el reporte desde Oaxaca advirtiendo que venía un ataque del EPR—, o por lo que se puede lograr en los interrogatorios de detenidos. En el caso de las explosiones en Veracruz, asumiendo que el EPR fue el responsable de ellas, se pueden argumentar serias fallas en el procesamiento y prevención. Si se sabía que venía una acción militar del EPR, ¿cómo se pudo lograr con tanta limpieza? Sólo se puede explicar por las enormes deficiencias del aparato de seguridad mexicano.

El Cisen tiene desde 2000 una serie de plantillas que permiten decodificar los comunicados del EPR. Normalmente, cuando los comunicados son extensos, significa que incorporan una serie de mensajes que sólo pueden ser descifrados si se tiene la documentación adecuada. Aunque el EPR guardó silencio en las últimas semanas, hubo dos comunicados que debieron haber sido interpretados adecuadamente. Uno, de la comandancia general del EPR hace casi dos semanas erigiéndose como los únicos voceros oficiales, y el otro, una carta de Francisco Cerezo Quiroz y Emiliana Contreras, jefes del EPR, a sus hijos, hace unos 10 días. El Cisen, como a principios de julio, confirmó la inminencia del ataque, pero Valdés, como en ese entonces, no tuvo la energía dentro del gabinete de seguridad nacional para hacerse oír.

Por otra parte, tras las explosiones en El Bajío, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda de células del EPR que los llevaran a sus jefes o que aportaran más luz sobre los eventuales atentados. Pero semanas de intensa persecución arrojaron pocos éxitos. Una célula del EPR detenida en Morelos días después de las explosiones en El Bajío produjo información sobre secuestros, pero no mucho más. Tampoco se ha detenido a algún jefe guerrillero. ¿Qué pasó, señores? Valdés no ha rendido frutos, y es la segunda ocasión en dos meses que falla. Inteligencia militar, que por vías legales y presuntamente al margen de la ley, está persiguiendo al EPR, tampoco. Las áreas de inteligencia no están funcionando adecuadamente. El responsable de la coordinación de seguridad nacional es Ramírez Acuña, a quien le ha faltado carácter y mando para articular a los diferentes grupos que responden por ella. Por ejemplo, el que atiende instalaciones estratégicas, bajo la dirección del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha tenido reuniones durante los dos últimos meses sin que la Secretaría de la Defensa, responsable directo de la seguridad, haya enviado a representante alguno. Los militares no sólo sabotearon a García Luna, sino a Ramírez Acuña y al presidente Calderón.

Los resultados están a la vista. La desarticulación conlleva a la incapacidad, y la suma de ambas, a la vulnerabilidad del Estado mexicano a todo tipo de ataques y procesos de desestabilización. Es inadmisibles, pero el presidente Calderón parece estar dispuesto a seguir tolerando estas fallas en su sistema de inteligencia. Un ajuste de funcionarios responsables es lo mínimo que podría exigírsele, pues el tema de los sabotajes no es un problema interno de su gobierno, sino uno mayor para el país, donde la responsabilidad principal sobre la seguridad, hay que recordárselo, es de él.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente
Raymundo
17 de septiembre de 2007

Riva

personal
Palacio

Incompetencia tolerada

Nuevas fallas y nuevos perdones en la seguridad del Estado mexicano llevan a pensar que el presidente Calderón está dispuesto a tolerar cualquier ineficiencia, si es de alguno de sus amigos

Cuando por una “falla técnica” fue censurado el discurso de la presidenta del Congreso previo a la ceremonia del Informe Presidencial el 1 de septiembre, la sola posibilidad de que ello descarrilara las negociaciones sobre la reforma fiscal motivó la renuncia del director de Cepropie, el órgano encargado de la transmisión. Pero cuando seis bombas del EPR en ductos de Pemex en Veracruz la semana pasada afectaron a la mitad del país, generando pérdidas superiores a los nuevos impuestos que busca Hacienda, dislocara el 25% del mercado de gas en el país, motivara el aumento de los hidrocarburos en el mundo y generara incertidumbre en los inversionistas, ninguna cabeza rodó. En las antípodas del primer caso, ni el director del Cisen, Guillermo Valdés, presentó su renuncia, ni hubo el menor asomo de pedírsela. Faltaba más. El amigo del presidente Felipe Calderón se queda en casa.

Por segundo sabotaje consecutivo, Valdés fue protegido por la Presidencia. Hace dos meses, cuando el EPR colocó bombas en instalaciones de Pemex en Querétaro y Guanajuato, el gobierno le dio palmadas en la espalda y le ofreció reparar el desmantelamiento del Cisen del sexenio pasado. Lo bisoño y su falta de carácter no fueron evaluados como una premisa básica para el relevo. El Presidente lo perdonó, pero el EPR no. Dentro del gobierno insisten que Valdés sí informó de lo que venía, lo cual es parcialmente cierto. Sí hubo un informe de inteligencia de que venía un nuevo ataque, pero lo que no produjo fue la información para evitarlo.

Valdés, como principal cabeza de los servicios de inteligencia civil, no tiene justificación ahora. Se empiezan a acumular evidencias de que el gobierno federal sí pudo haber evitado los bombazos en Veracruz, o cuando menos varios de ellos, de haber hecho un seguimiento de las alertas que empezaron a ser emitidas poco después de los bombazos en el Bajío que reivindicó el EPR el 10 de julio pasado. Una de ellas fue publicada la semana pasada en El Sol de Orizaba, donde señala que las autoridades sabían desde el 19 de julio que los siguientes atentados del EPR —que anunció en sus comunicados— serían en Veracruz.

Ese mismo día, el gobierno veracruzano notificó a Pemex que 12 de sus instalaciones en el estado eran susceptibles a ser atacadas. En efecto, ahí les pegaron: en el estratégico gasoducto Cactus-San Fernando; en dos puntos del gasoducto Zempoala-Santa Ana; en tres puntos del oleoducto Nuevo Teapa-Tula; y en el poliducto Minatitlán-México.

La alerta veracruzana movilizó a los técnicos de Pemex, quienes reforzaron junto con las autoridades estatales la vigilancia. Resultado también de ello fue un paquete de fotografías en poder del gobierno federal donde se mostraba el deterioro de las áreas de protección de los ductos. Una de las fotografías muestra la alambreada rota en una de las instalaciones, por donde semanas después entró caminando el EPR para colocar una de las bombas. Para el EPR, cuyo grado de dificultad para cometer el sabotaje fue reducido por la negligencia oficial, la operación fue todo un éxito: cero víctimas, severas pérdidas al aparato productivo, y alto impacto mediático. Para el gobierno federal, desastre completo.

El Cisen facilitó la operación al EPR al no haber alertado debidamente a las policías federales y al Ejército. Si se analiza el perímetro en el cual se colocaron las bombas y la sincronización del ataque, se puede establecer que pudieron haberlas colocado cinco células —sólo una pudo haber duplicado su trabajo, la que las puso en el gasoducto Zempoala-Santa Ana, en los puntos del río La Antigua y en Actopan— con un número aproximado de cuatro a seis personas, dos que las colocaron en los ductos, y de dos a cuatro de seguridad.

Al no haber explotado una de las bombas se pudo determinar que los explosivos y la mezcla empleada fueron los mismos del Bajío y en las bombas colocadas, en noviembre pasado en el banco —donde tenía sus cuentas el IFE—, en el Tribunal Electoral y en el auditorio del PRI: Semptex, Anfo y fertilizante. Cada una de las bombas tuvo un costo, si se establece como medida el valor de los productos en el mercado negro en Oaxaca, donde nació el EPR, de aproximadamente 12 mil pesos. Es decir, por seis bombas, el valor estimado fue de 72 mil pesos.

El EPR conoce de explosivos. Su jefe, Tiburcio Cruz Sánchez, y su esposa, Elodia Cruz Canseco, junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, uno de los dos desaparecidos por los cuales la guerrilla está realizando estos atentados, han entrenado a la guerrilla desde principio de los 70 en explosivos y demoliciones. Este conocimiento acumulado es una de las razones por las cuales nunca causan víctimas, que les generaría un repudio social en sectores que, si bien puedan estar en desacuerdo con sus métodos, tampoco se sienten amenazados por ellos. El conocimiento sobre dónde hacer más daño, es otra cosa.

Una de las líneas de investigación es que el EPR recibió información técnica de personas que conocen la ingeniería de las instalaciones. Cinco de las seis bombas fueron colocadas en las válvulas de seccionamiento, donde el metal de la tubería tiene más presión y por tanto es más débil, como fueron colocadas en el Bajío.

De acuerdo con hipótesis de las investigaciones, las bombas tuvieron que haber sido armadas en casas de seguridad en el puerto de Veracruz y en Orizaba, para evitar el riesgo del traslado desde otros estados del país en donde tienen mayor fuerza operacional. El EPR tiene alguna presencia en Veracruz a través de simpatizantes, pero el único punto cercano a donde fueron los sabotajes es Zongolica. Autoridades en Veracruz consideran que es posible que las células del EPR hayan entrado al estado por Puebla, lo que llevaría a considerar que salieron de la ciudad de México, y que pudieron haber huido por la Huasteca tamaulipeca. Pero en concreto, no hay nada.

Las autoridades federales siguen dando palos de ciego, y se empieza a notar nerviosismo en sus acciones. El fin de semana pasado, agentes de la PGR detuvieron y mantuvieron incomunicado durante cerca de ocho horas a un ex guerrillero del desaparecido PROCUP, Hermenegildo Torres, para interrogarlo sobre los planes del EPR. En días previos se informó que la PGR pidió a Interpol investigar al especialista argentino en guerrillas Jorge Lofredo, que fundó una página en internet para el estudio de los movimientos armados en América Latina. Ir sobre personas que no están vinculadas al EPR parece ser la mejor opción que tiene en este momento el gobierno federal en busca de una ruta que los lleve a la cabeza de la guerrilla.

Curioso que sólo vea la paja en el ojo ajeno, y no termine de asimilar que el problema de origen lo tienen dentro, en el Cisen como la cabeza más visible, cuyo director sigue siendo defendido caprichosamente, aunque a juzgar por sus capacidades, la creciente escalada de violencia del EPR nos vaticine un nuevo atentado próximamente.

Estrictamente
Raymundo
19 de septiembre de 2007

Riva

personal
Palacio

¿Dónde están?

- El EPR está en lo alto de las preocupaciones del gobierno federal, no así el paradero de dos de sus dirigentes, desaparecidos a finales de mayo

Inquietantes versiones sobre el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya (presuntamente Constantino Alejandro Canseco Ruiz), dos cuadros estratégicos en la estructura del EPR, están circulando profusamente en las altas esferas del gobierno mexicano. Pero, al mismo tiempo, se está dando un control de daños preventivos. Desde la semana pasada, en voz del secretario de la Marina, almirante Mariano Francisco Saynez, se comenzó a impulsar oficialmente la hipótesis de que todo se trataba de un ajuste de cuentas de la guerrilla, lo que había sido sugerido semanas atrás por el procurador general, Eduardo Medina Mora. Como hipótesis es válida, aunque puede argumentarse en su contra.

La historia de ajustes de cuentas de la guerrilla, conocida por sus documentos internos y las relatorías de sus congresos, se da a partir de factores objetivos que los enfrentan. Uno de ellos es por razones ideológicas y programáticas, como sucedió en las escisiones del ERPI, donde los ex jefes eperristas fueron acusados de estar haciendo a un lado la parte ideológica que —alegaban— debilitaba al movimiento, y de la Tendencia Democrática Revolucionaria, donde el diseño de la línea militarista provocó la división. Otra razón es cuando un comandante de zona guerrillera se aparta de las líneas estratégicas de la comandancia general, y como sucedió en Guerrero, establece nexos con el narcotráfico. Pero en todos los casos, los ajustes son en silencio, a diferencia de las desapariciones de sus dos cuadros, en las que todos los grupos guerrilleros, tanto el EPR como el resto de los movimientos armados, difundieron comunicados ratificando que ellos no los tenían. Además, las amenazas vía internet que ha recibido la familia Cerezo Contreras, con lazos sanguíneos a los Cruz Sánchez y Canseco Ruiz, tienen un tono soez que no usa la guerrilla y sí, en cambio, las fuerzas de seguridad.

Pero hay otras hipótesis, manejadas privadamente dentro del gobierno mexicano, que cuentan historias muy diferentes a la difundida por el almirante Saynez:

1.— El EPR sostiene que Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos en Oaxaca el 25 de mayo pasado, y que la última vez que los vieron estaban bajo custodia de policías y militares. Dentro del gobierno manejan, en esta línea de investigación, que ambos salieron de la ciudad de México en autobús, aunque no está claro si juntos o separados, por lo que revisaron todas las rutas para determinar si en uno de los retenes en las carreteras federales se dieron incidentes de secuestro. No hubo nada en ese periodo, salvo los robos que son parte natural en algunos de esos trayectos. Una vez en Oaxaca, continúa esta hipótesis, fueron detenidos por azar por policías estatales, quienes los entregaron a militares. Estuvieron en la VIII Región Militar, a cargo del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, quien los envió a México, según esta misma versión, torturados pero con vida. La Secretaría de la Defensa ha dicho repetidamente que sus elementos no los detuvieron.

2.— Que Cruz Sánchez y Reyes Amaya viajaban por la autopista a Puebla cuando su viejo Volkswagen sufrió una avería. Se detuvieron a repararlo en el centro de reabastecimiento de Río Frío, adonde llegó una camioneta de la Policía Federal Preventiva,

que se detuvo porque sus agentes necesitaban ir al baño. Al ver el auto se acercaron con el propósito de ayudarlos, pero uno de ellos se puso nervioso y se asomó en la cajuela, en la parte delantera del vehículo. Uno de los agentes sospechó y cuando se asomó en el compartimiento descubrió armas y propaganda, de acuerdo con esta hipótesis, por lo que los llevaron ante el Ministerio Público. Posteriormente, sigue esta versión, los pusieron a disposición del Ejército. Desde un principio, la PFP también informó a sus superiores que no tenían reporte de que esas personas hubieran sido detenidas por ellas.

¿Dónde están?

1.— Si la hipótesis del almirante Saynez es correcta, ambos están muertos. Sin embargo, la reiteración de los diferentes grupos armados de que no están en su poder introduce nuevas dudas a la versión oficial.

2.— La versión del EPR es que están en el Campo Militar Número 1, adonde los habría transferido el general Oropeza Garnica, lo que ha sido desmentido por el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien abrió las puertas de la instalación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tampoco encontró rastro alguno de ellos.

3.— La tercera hipótesis es que fueron trasladados a una de las seis casas de seguridad que tiene el Estado Mayor Presidencial en el perímetro de la sede de Guardias Presidenciales, cerca de la estación Chabacano del Metro de la ciudad de México, por instrucciones del general Salvador Cienfuegos, comandante de la I Región Militar, que abarca el Distrito Federal y otras tres entidades. Pero las varias veces que el presidente Felipe Calderón preguntó al general Galván en las reuniones del gabinete de seguridad nacional si alguna rama militar los tendría, él lo negó.

¿Dónde están?

La PGR dio entrada a la denuncia de su desaparición luego de que la Secretaría de Gobernación se negó a aceptar una documentación similar. La PGR y las policías federales se supone los están buscando, pero no han informado del avance de sus pesquisas, o cuando menos ratificado en alguna declaración al vuelo que no se han olvidado de encontrar su paradero. Lo que sí ha hecho el gobierno federal es intensificar la persecución del EPR para tratar de prevenir nuevos atentados y elevarle la categoría de guerrilla a “terrorista”, lo que no es un mero cambio semántico, sino que significa un tratamiento policial-militar de otra envergadura, al igual que su combate, y que sugiere que buscarán apoyo de inteligencia de servicios extranjeros, como ya lo tienen en otros campos.

No está mal que las fuerzas de seguridad del Estado protejan al Estado de actos terroristas. Lo que sí está mal es que no den señales de que la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya se encuentre en la misma dinámica, pese a que sería la única forma real de frenar los actos de sabotaje y eventuales secuestros que planea el EPR como represalia, mientras no se informe dónde están sus dirigentes y se les presente con vida. Si la adecuada acción del gobierno para salvaguardar la seguridad nacional es vital, la presentación con vida de los dos militantes guerrilleros es fundamental para la ética del gobierno de Felipe Calderón. El Presidente no se puede dar el lujo de que, en aras de la seguridad nacional, sus militares y policías se manejen al margen de la ley. Él se dice un abogado de los derechos humanos, y esta es una gran oportunidad para demostrar que ni otorga funciones metaconstitucionales al Ejército ni su gobierno está rebasado por una fuerza superior que lo muestra incapaz de localizar a dos eperristas notables que nadie encuentra desde hace más de tres meses.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

Estrictamente

Raymundo

21 de septiembre de 2007

Riva

personal

Palacio

El día que perdieron al EPR

- Seis años de frustraciones en el combate al EPR son directamente atribuibles al desorden con el que el ex presidente Fox y su equipo manejaron la inteligencia civil en su sexenio

Recién arrancado su gobierno, la guerrilla recibió al entonces presidente Vicente Fox Quesada con un par de bombazos en instalaciones bancarias, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

Era el 8 de agosto de 2001 y Fox, bisoño y sin un gabinete experto, presionó al Cisen y a la Policía Federal Preventiva (PFP) para producir resultados. No había pistas que permitieran en ese momento entregar a los responsables, pero Fox estaba empeñado en que le entregaran cabezas en forma casi instantánea.

En el Cisen y la PFP tuvieron que ceder ante las peticiones presidenciales y “reventar” dos casas de seguridad de la guerrilla que venían vigilando de tiempo atrás con el propósito de acumular el mayor volumen de información posible y dismantelar, en definitiva, al EPR.

En una de ellas, en el estado de México, habían vivido el jefe de la guerrilla, Tiburcio Cruz Sánchez, y su esposa, Elodia Canseco Ruiz.

Las fuerzas federales entraron a esa casa, ubicada en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, al oriente del valle metropolitano, que habitaba en ese momento un carpintero —que se encuentra en la cárcel—, donde encontraron ropas de tipo militar, armas y propaganda del EPR y de sus escisiones, Tendencia Democrática Revolucionaria y las FARP, además de documentos internos, como un manual llamado “Sistema de Información”, y una minuta sobre la ejecución de tres miembros, David, Antonio y Miriam, a quienes acusaban de robo y traición.

En otra de las casas de seguridad, en Xochimilco, al sur de la ciudad de México, donde incautaron armas, dispositivos electrónicos para explosivos, y equipos de cómputo y propaganda, encontraron la pista que los llevó al arresto un mes más tarde de los hermanos Antonio Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, hijos de Francisco Cerezo Quiroz, el nombre que por más largo tiempo ha usado Tiburcio Cruz Sánchez.

Con esa operación, la vieja línea de investigación sobre la guerrilla del Cisen y la PFP había quedado desbaratada. La presión de Fox llevó también a un cambio de estrategia en la vigilancia de los movimientos armados sobre la prevaeciente, inspirada por el contralmirante Wilfrido Robledo, director de la PFP en el gobierno de Ernesto Zedillo, que se enfocaba en acumular información sin dar golpes que pusieran en riesgo el paciente proceso de inteligencia.

La dinámica impuesta por la presión de Fox resultó en algunos arrestos, pero dejó intacta la estructura orgánica y operativa de la guerrilla. Robledo fue derrotado por Fox por partida doble, al permitir también que su entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, hiciera a un lado todos los considerandos de seguridad nacional y lo persiguiera penalmente, terminando de romper los vínculos que concentraban la información sobre la guerrilla.

Al perder la línea continua de información sobre el EPR, el gobierno intentó recuperarla mediante una estratagema: dejó en libertad a Alejandro Cerezo Contreras en marzo de 2005 y le puso una “cola” permanente para seguirlo.

Esa vigilancia no les dio el resultado esperado. Presionados nuevamente por Fox, los cuerpos de seguridad tuvieron que “reventar” otra casa de seguridad que habían estado vigilando durante dos años. Esa casa se encontraba en San Juan Ixtayoapan, en Tláhuac, una delegación semirural al sur del Distrito Federal, donde la PFP planeó un operativo para atacar ese objetivo donde, presumían, no sólo vivía la familia Cerezo Contreras y sus padres, sino estaba la comandancia general del EPR.

La PFP envió a tres agentes sin experiencia operacional en trabajo contrainsurgente, y el 23 de noviembre de 2005 fueron linchados. Dos de ellos murieron a golpes y por las quemaduras cuando les prendió fuego una turba manipulada por una célula eperrista, que los había descubierto dos semanas antes y les tendió una trampa. Los servicios de contrainteligencia del EPR habían detectado la presencia de los policías federales y estimularon un linchamiento.

La operación fue un rotundo fracaso. No detuvieron a nadie y el EPR movió su centro de operaciones a la Reserva Tepeyac, en el norte de la capital, donde tenía otra casa de seguridad. Todas las casas de seguridad del EPR en la zona metropolitana de la ciudad de México fueron abandonadas, y las autoridades no han podido restablecer hasta ahora la línea de investigación rota por el conflicto de Gertz Manero contra Robledo, y la insistencia de Fox por resultados inmediatos tras los bombazos. El Cisen, de donde habían salido los dos principales expertos en el EPR, Robledo, hoy fuera de actividad gubernamental, y Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública —sin responsabilidad directa en el tema—, también sufrió merma con la llegada de Eduardo Medina Mora, quien encabezó el servicio de inteligencia civil durante casi todo el sexenio foxista.

Medina Mora redujo el número de elementos y, de acuerdo con altos funcionarios federales calderonistas, inició el dismantelamiento humano y tecnológico de la agencia, que viene arrastrando hoy en día.

La información que tiene el Cisen sobre el EPR en la actualidad es obsoleta y deficiente. Por ejemplo, identifican a Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos militantes eperristas desaparecidos a fines de mayo pasado, como Constantino Alejandro Cruz

Sánchez, a quien también ubican como el número 2 del EPR, y al que afirman tener videograbado en marchas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante la larga ocupación de la capital oaxaqueña.

Sin embargo, hay nuevas evidencias sólidas que Reyes Amaya no es quien supone el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Constantino Alejandro, de quien tampoco se tienen noticias cuando menos hace tres meses, recibió un balazo cerca del corazón que le dejó permanentemente la dolencia a fines de los 70, cuando era estudiante en la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, y el PROCUP, precursor del EPR, pasaba por momentos de fuertes contradicciones internas.

Las fallas del Cisen se han venido multiplicando bajo la conducción del nuevo director, Guillermo Valdés, quien ha venido siendo remplazado gradual pero enérgicamente en esas tareas por el coronel Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, jefe de la Sección II del Estado Mayor Presidencial, a quien le están encomendando cada vez más el trabajo de inteligencia sobre la guerrilla que los civiles, en este caso encabezados por un amigo del presidente Felipe Calderón, no han podido hacer.

La participación de los militares, como en otras áreas de la seguridad pública, se va ampliando de manera sobresaliente, y el EPR es su siguiente objetivo, tras varios años de fracasos y frustraciones en su combate y control, porque a quienes responsabilizaron de la inteligencia civil no cumplieron su tarea. Pero no se esperan resultados pronto. Seis años prácticamente echados por la borda, frente a una guerrilla crecientemente sofisticada, son demasiado para empatar el juego.